

Estudio: “El impacto de la participación ciudadana en las políticas de inclusión social”

Inclusión social es un concepto que ha tenido mucho éxito a la hora de redefinir los objetivos de la política social ante los retos de una nueva época, caracterizada por el cambio acelerado, la movilidad, la inestabilidad y la fragmentación a todos los niveles: en lo económico, en lo social y en la trayectoria vital de cada uno. Por su parte, la participación ciudadana también es una idea de gran aceptación, planteada como una forma de salvar a la democracia de su creciente alejamiento e ineficacia respecto a los problemas e inquietudes de la ciudadanía.

La incorporación de dichos conceptos en los discursos y, en menor medida, en las prácticas gubernamentales ha conllevado progresos en cuanto al respeto de los derechos humanos, pero es evidente que no ha sido suficiente para acabar ni con la exclusión social ni con falta calidad democrática. Los avances son selectivos, y van acompañados de múltiples situaciones de estancamiento o incluso regresión, manifestada por ejemplo en forma de precariedad laboral, degradación de los servicios básicos o negación de los derechos políticos.

No cabe achacar tal situación únicamente a la actual crisis económica. Ciertamente, a la vez que engrosar el número de damnificados, la crisis ha reducido las capacidades de los gobiernos, a todos los niveles para incidir positivamente sobre los problemas a través de políticas propias. Pero éstas habían sido menoscabadas ya previamente por la falta de compromiso real de muchos gobernantes y por los planteamientos que ven en el mercado la única forma válida y posible de regulación social.

¿Cómo se explica tal diferencia entre discursos y realidades? Quizás debemos buscar el problema en el hecho que hemos dado por descontado que los significantes inclusión social y democracia participativa se correspondían con significados unívocos y evidentes para todo el mundo. Sin embargo, no es así. Existen diversas formas de entender la democracia: liberal, republicana, autónoma,... con formas y grados diversos de exclusión/inclusión. Incluso la participación ciudadana puede obedecer a enfoques y motivaciones muy diferentes: desde el trabajo para (re)generar lo público a la defensa eficaz de intereses privados. Y bajo el paraguas de la inclusión social también pueden esconderse realidades como la estigmatización de todo(s) aquello(s) que no se ajuste(n) a un modelo “correcto” –en lo laboral/social/cultural- de persona, familia o comunidad, de consecuencias tan execrables como la asimilación, marginación o la eliminación.

Es por ello que el trabajo parte de un análisis conceptual crítico y una toma de posición: entendemos que inclusión social y democracia participativa sólo tienen sentido en tanto que objetivos políticos comprometidos con el reconocimiento del otro -de la igualdad en la diferencia- y con los derechos civiles, políticos y sociales. Dichos objetivos permiten, no obstante, la aplicación de instrumentos muy diversos, institucionales y no institucionales.

A partir de aquí indagamos sobre la relación entre dos conceptos que, intuitivamente, diríamos que van de la mano. Concretamente nos preguntamos si la existencia de una democracia más participativa es una condición necesaria para avanzar hacia sociedades más inclusivas, y buscamos la respuesta poniendo el foco sobre las ciudades, porque es en las áreas urbanas donde se manifiestan con toda su crudeza los problemas y retos de la globalización, así como las posibles vías de solución, en las cuales los gobiernos locales deberán jugar un papel clave.

La respuesta se articula a partir del desarrollo teórico de dos tipos ideales: políticas de inclusión sin participación y políticas de inclusión con participación, lo que nos permite, además de constatar y fundamentar el vínculo entre inclusión y participación en todas las esferas (el trabajo, los servicios públicos, la educación, la vida cotidiana en los barrios,...), elaborar un mapa/inventario de propuestas concretas para poner en valor y reforzar dicho vínculo.

Lo que emerge es una constelación de alternativas, donde la solución no es ni aplicar un modelo basado en el mercado, que se ha mostrado fallido, ni tampoco regresar al Estado social protector, que es demasiado rígido y ahoga la autonomía social, sino un modelo que ponga en valor lo mejor del Estado, del mercado y del tercer sector para reforzar lo público: valores públicos, servicios públicos, espacios públicos... como base de la inclusión social. Una esfera pública fuerte debe construirse día a día, incorporando la participación, con formatos diversos y adaptados a cada contexto, en las instituciones, en las empresas y en las iniciativas sociales.